

## Capítulo primero

### **El segundo mandato Trump: antiglobalismo, supremacismo y políticas hemisféricas**

*José Antonio Sanahuja<sup>1</sup>*

#### **Resumen**

En sus primeras semanas, el segundo mandato de Donald Trump se ha caracterizado por su radicalidad e ímpetu y por una estrategia de comunicación que sitúa a sus oponentes a la defensiva. Sus políticas, basadas en el Proyecto 2025 de la Fundación Heritage, están erosionando los controles democráticos y de los poderes legislativo y judicial, y pretenden debilitar la administración federal. La coalición política que apoya a Trump incluye los tecnopolios digitales y un partido republicano transformado que vira hacia la extrema derecha.

Dando prioridad a la cuestión migratoria, ha adoptado una serie de órdenes ejecutivas, en ocasiones de dudosa legalidad, que incluyen deportaciones masivas y militarización de la frontera. Con argumentos tanto ideológicos como de eficiencia, ha iniciado el desmantelamiento de distintas agencias federales.

En ese contexto, se examina la política exterior «America First», que parte del rechazo al multilateralismo y prioriza el uso de aranceles como herramienta coercitiva. Supone retirar a Estados

---

<sup>1</sup> Este texto se cerró el 20 de marzo de 2025.

Unidos de varios acuerdos internacionales y adoptar una política comercial marcadamente proteccionista. Trump también cuestiona el vínculo noratlántico, lo que implica un cambio en las relaciones con Europa y el apoyo a Rusia en la guerra de Ucrania. Prioriza la contención de China desde el Indopacífico, con un menor compromiso con la OTAN. El capítulo dedica especial atención a América Latina, a la que amenaza con el aumento de aranceles. Con relación a México, ha adoptado políticas migratorias estrictas que incluyen deportaciones y la militarización de la frontera. En Panamá, ha exigido un mayor control del canal frente a la supuesta amenaza de China.

El capítulo concluye que el segundo mandato de Trump es más radical, organizado y estratégico que el primero, con un fuerte cuestionamiento del orden liberal internacional. Estados Unidos se ha convertido en un socio errático e impredecible, lo que dificulta la cooperación internacional. La política exterior de Trump, agresiva e ideologizada, amplifica la crisis de la globalización y la rivalidad geopolítica, haciendo de Estados Unidos un actor difícil de tratar en un sistema internacional altamente interconectado.

### **Palabras clave**

Estados Unidos, Trumpismo, Relaciones internacionales, Geopolítica, América Latina.

### **Trump's second term: anti-globalism, supremacism and hemispheric policies**

### **Abstract**

*In its first weeks, Donald Trump's second term has been marked by his radicalism and dynamism, and by a communication strategy that puts his opponents on the defensive. His policies, based*

*on the Heritage Foundation's Project 2025, erode democratic controls, circumvent legislative and judicial checks and balances, and seek to weaken the federal administration. The political coalition supporting Trump includes the digital technopoles and a transformed Republican Party shifting to the far right.*

*By prioritizing immigration, he has issued a series of executive orders, some of questionable legality, which include mass deportations and the militarization of the border. With arguments based on ideology as well as efficiency, he has begun the dismantling of several federal agencies.*

*In this context, the "America First" foreign policy is examined, which is based on the rejection of multilateralism and prioritizes the use of tariffs as a coercive tool. It involves the withdrawal of the United States from various international agreements and the adoption of a markedly protectionist trade policy. Trump also questions the North Atlantic link, which implies a change in relations with Europe and support for Russia in the war in Ukraine. He prioritizes the containment of China from the Indo-Pacific, with less commitment to NATO. The chapter pays special attention to Latin America, which he threatens with increased tariffs. Regarding Mexico, it has adopted a strict immigration policy, including deportations and the militarization of the border. In Panama, he has called for greater control of the canal in the face of a perceived threat from China.*

*The chapter concludes that Trump's second term has been more radical, organized, and strategic than his first, with a strong questioning of the liberal international order. The United States has become an erratic and unpredictable partner, making international cooperation increasingly difficult. Trump's aggressive and ideologized foreign policy exacerbates the crisis of globalization and geopolitical rivalry. This makes the United States a difficult actor to deal with in a highly interconnected international system.*

### **Keywords**

*United States, Trumpism, International relations, Geopolitics, Latin America.*

## Introducción: el tsunami Trump 2.0

Más que el ciclo de las mareas, que en ocasiones se utiliza como imagen metafórica de un cambio de gobierno, el inicio de la segunda presidencia de Donald Trump evocaría la imagen de un tsunami o una inundación. Aunque anunciada, ha provocado el estupor general por su radicalidad y su ímpetu, incluso entre una parte significativa de sus votantes. Existía el precedente del primer mandato de Trump, que también se inició con una oleada de medidas extremas, y para el segundo mandato se esperaba un trumpismo más organizado, pero también más extremista, disruptivo y revanchista. Tras el discurso inaugural, que ya adoptó un fuerte tono supremacista e imperial, se han sucedido de manera frenética y poco coherente órdenes ejecutivas, declaraciones agresivas, provocaciones y amenazas a actores internos y externos, plagadas de falsedades y desinformación.

Esa avalancha puede parecer caótica, pero en ella hay método y estrategia: la que ha caracterizado la comunicación y la práctica política del trumpismo y de las nuevas fuerzas de ultraderecha nacional-populista que, con rasgos locales, son un movimiento en ascenso a escala global. En palabras de uno de sus ideólogos, Steve Bannon, esa estrategia se basa en desbordar la esfera pública con una rápida inundación de acontecimientos y noticias, muchas de ellas falsas a sabiendas, con una retórica populista y reaccionaria (Camargo, 2024: 169 y 185). Como ya advirtió George Lakoff (2004: 50), ello sitúa a sus oponentes a la defensiva y les obliga a asumir los marcos discursivos conservadores, lo que termina reforzándolos. En la estrategia trazada por Bannon, como indica el columnista Ezra Klein, la clave es la velocidad de salida:

«[...] si se abruma a los medios de comunicación, si se les da demasiados temas a examinar, todos a la vez [...] no puede surgir una oposición coherente. Incluso pensar de manera coherente es difícil. Las dos primeras semanas de Donald Trump en la casa Blanca han seguido la estrategia de Bannon como un guion. El punto es la inundación. El objetivo es el agobio. El mensaje no estaba en una sola orden ejecutiva o anuncio. Estaba en el efecto acumulativo de todo». (Klein, 2025).

En suma, el inicio del segundo mandato de Trump responde a una estrategia de comunicación y a la búsqueda de su efecto performativo para imponer su marco discursivo, neutralizar a la oposi-

ción, generar una imagen de poder omnímodo para el ejecutivo y de potencia imperial que retorna en una posición de primacía a la política internacional. Pero también hay varias diferencias importantes respecto a su primer mandato.

En primer lugar, el trumpismo ahora responde a un amplio proyecto de contestación del orden liberal en sus dimensiones interna e internacional, y en los planos político, económico y sociocultural. Se basa en un trabajo orgánico, ideológico y programático previo más articulado, que se sistematizó en el denominado Proyecto 2025, liderado por el *think-tank* conservador Fundación Heritage.

En segundo lugar, y como expresión de ese proyecto, Trump quiere eliminar las trabas que suponen la legislación, los controles y los contrapesos del sistema democrático de Estados Unidos, que en su primer mandato obstaculizaron o impidieron que pudiera gobernar sin cortapisas. En particular, quiere evitar que se interpongan en su actuación los poderes legislativo y judicial y la propia administración federal y su personal técnico y funcionario —lo que el trumpismo denomina «el Estado profundo»—, que insiste en la observancia de la ley y se guía por el conocimiento experto. De hecho, en pocos días, bajo la dirección de Elon Musk, se ha producido una traumática toma de la administración federal que supone el cierre abrupto de oficinas y renuncias y despidos masivos de técnicos y funcionarios.

En tercer lugar, el trumpismo tiene ahora como base una amplia coalición política articulada en torno a un partido republicano transformado y en ocasiones irreconocible respecto al conservadurismo político y el liberalismo económico del *Great Old Party*. Con posiciones que se han desplazado hacia la extrema derecha, los republicanos y sus aliados políticos y económicos son parte también de una amplia «internacional reaccionaria» que agrupa una constelación de fuerzas de ultraderecha nacionalista, que en este trabajo se caracteriza como «neopatriota», con alcance global (Orellana y Michelsen, 2019; Sanahuja y López Burian, 2023). Ello comporta un giro radical en los alineamientos internacionales de Estados Unidos, ahora más guiados por la cercanía ideológica dentro de esa internacional reaccionaria que por sus alianzas tradicionales en el espacio noratlántico y el internacionalismo liberal en el que se han sustentado durante décadas. En particular, ello supone el cuestionamiento del vínculo noratlántico y las relaciones con Europa, y un rápido viraje en favor de Rusia en la guerra de Ucrania.

En cuarto lugar, en la coalición que apoya a Trump tienen un papel clave los nuevos tecnopolios digitales y una oligarquía empresarial que ve en el trumpismo un instrumento para eliminar las normas que limitan el desarrollo de sus negocios, basados en las nuevas tecnologías o el acceso a recursos naturales, en nombre de la privacidad, de derechos individuales y colectivos, de la transición ecológica, y de reglas del derecho internacional (Pistor, 2025). Ello se dirige, en particular, al propio Gobierno federal. Y, en el exterior, a las normas internacionales o de determinados Gobiernos, en particular a las adoptadas por la Unión Europea (UE), que a través del llamado «efecto Bruselas» tienen alcance regulatorio global (Bradford, 2020; Applebaum, 2025).

Finalmente, como argumento general, el discurso y las prácticas antiglobalistas del trumpismo y del conjunto de esas fuerzas de extrema derecha neopatriota es, en términos de agencia, una variable causal clave en la crisis de hegemonía del internacionalismo liberal y de un Occidente articulado en torno al espacio noratlántico, y del proceso de transición de poder que caracteriza al sistema internacional contemporáneo (Sanahuja, 2017 y 2024). Con ello, Estados Unidos se ha convertido en uno de los más activos actores revisionistas respecto del orden internacional liberal y «basado en reglas».

## 1 Contestación del orden liberal internacional y antiglobalismo: Trump y el Proyecto 2025

El trumpismo es un movimiento sociopolítico muy idiosincrático, marcado por la trayectoria histórica, la cultura y el sistema político de Estados Unidos. Pero al mismo tiempo es la expresión estadounidense del ascenso global de nuevas fuerzas de ultraderecha, que pueden ser descritas como «neopatriotas», y responde a factores tanto causales como también globales. En particular, a las consecuencias socioeconómicas de la crisis de la globalización, que da inicio a una etapa de interregno y radical incertidumbre que pone en cuestión los anteriores relatos de progreso. Como se ha señalado en otros trabajos, ello ha alimentado la desafección ciudadana con el orden liberal, político y económico y sus elites, que deja de responder a las expectativas de bienestar y a ideas compartidas de equidad, acceso y voz en cada sociedad<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> Sobre esta categoría se ha desarrollado una amplia teorización y análisis, que puede verse en Sanahuja, 2017; Sanahuja y López Burian,

Estas nuevas ultraderechas neopatriotas, de la que el trumpismo es uno de los principales exponentes, aparecen en el cruce entre ideología y crisis de globalización. Por ello, se definen a partir de un doble clivaje sociopolítico: por un lado, el tradicional eje izquierda-derecha, en el que se sitúan en posiciones ultraconservadoras, y, por otro, el que define las distintas posiciones frente a la globalización, en un eje que contrapone nacionalismo y soberanismo frente al cosmopolitismo y el internacionalismo liberal. En ese eje, la característica común a estos movimientos es la politización y contestación del orden internacional liberal y de lo que denominan el «globalismo», que estos movimientos describen de manera difusa y, en ocasiones, con relatos conspirativos.

En nombre de la soberanía y la libertad de las naciones, del «pueblo verdadero» o de los individuos, en su versión libertaria, rechazan los valores, normas e instituciones del internacionalismo liberal, considerado *woke* tanto en su expresión nacional como internacional. Ese rechazo se extiende a las élites y fuerzas políticas que han estado al cuidado de su gobernanza, legitimación y reproducción, con estrategias y discursos populistas. Por ello, esta confrontación se expresa muchas veces en clave de «guerras culturales» contra el globalismo, que presentan como imposición antidemocrática de élites transnacionales no electas y de elites locales cómplices. Frente a ellas construyen imaginarios restrictivos de comunidad, nación, pueblo, cultura o tradición, y frente a la inmigración, de carácter nativista. Finalmente, estas ultraderechas neopatriotas son parte de una «internacional reaccionaria» que comparte argumentos, discursos y redes organizativas formales e informales y el propósito común de impugnar el orden vigente.

El término «contestación», en este contexto, se define como el conjunto de discursos y prácticas sociales que politizan, en clave de polarización, y cuestionan las normas, instituciones y el orden internacional en lo referido a su legitimidad, su origen o fundamentos, los actores que las sostienen, o su contenido sustantivo (Zürn, 2014; Wiener 2014 y 2017; Orchard y Wiener 2023; Ekman y Everts, 2024).

A escala global pueden identificarse al menos seis nodos temáticos en los que se entrecruzan las normas y consensos nacionales e internacionales, que son el objeto de esa estrategia de

---

2023 y 2024. Véase también: Sanahuja, 2024. Para sus expresiones latinoamericanas, véase Sanahuja y López Burian, 2020.

politización y contestación (Sanahuja y López Burian, 2024). Lo que hasta ahora se ha mostrado del segundo mandato de Trump responde, de forma muy visible, a esa matriz.

El primero de esos nodos se refiere a los valores, normas e instituciones democráticas y, en particular, al Estado de derecho. Los neopatriotas reivindican pautas autoritarias que, en nombre de la nación, la comunidad o la seguridad, afectan la separación de poderes o las garantías de las libertades civiles y políticas. En algunos casos ello supone políticas punitivistas, militaristas y securitizadoras de asuntos sociales.

El segundo afecta a las normas e instituciones relacionadas con el comercio internacional y las inversiones. Supone el rechazo a la constitucionalización externa de las reglas de comercio e inversión con normas de derecho internacional —uno de los rasgos constitutivos de la globalización— en la Organización Mundial de Comercio (OMC) o los acuerdos comerciales regionales. Pero ese rechazo o contestación a las normas (neoliberales) del orden económico internacional puede llevar tanto a políticas proteccionistas en el comercio, la protección de sectores estratégicos frente a la inversión extranjera, considerada hostil, como a políticas ultra-liberales de apertura unilateral.

El tercero se centra en los bienes públicos, como el medio ambiente o la salud. En materia ambiental la contestación se centra en el cambio climático, la transición energética o el cuidado de la biodiversidad. Parte tanto de apelaciones nacionalistas al crecimiento económico como de perspectivas libertarias centradas en las libertades individuales. Se asocia al rechazo al saber experto y al conocimiento científico, denunciados como ideología *woke*, como mostró la pandemia del covid-19, en la que politizaron y contestaron los confinamientos, el uso de mascarillas, las campañas de vacunación o la cooperación internacional en salud.

El cuarto nodo agrupa las normas de derechos humanos, particularmente en cuestiones de igualdad de género y diversidad sexual. La confrontación abierta con los feminismos y la impugnación de la diversidad y lo que denominan «la ideología de género» son herramientas de (re)politización, polarización y «batalla cultural», en espacios como la política social, las instituciones educativas, la salud y las reglas de convivencia cotidiana.

El quinto lo constituyen las políticas de migración. Con discursos securitarios, identitarios y nativistas, se presenta como amenaza al empleo y al bienestar, a la comunidad, la nación y su tradición,



cuestionado también el multiculturalismo y el reconocimiento de la diversidad.

El sexto se refiere al propio orden liberal internacional y la noción misma de Occidente y posición hegemónica. El elemento común es el cuestionamiento de las normas e instituciones del orden liberal internacional y del internacionalismo liberal, en la forma que adopta en la posguerra fría y el periodo de globalización. Con una agresiva retórica antiglobalista se impugnan el sistema de Naciones Unidas y las organizaciones regionales de integración y cooperación, como la UE. Con una retórica altamente ideologizada piensa la política exterior en clave bilateral y transaccional. Sin embargo, entre los neopatriotas hay posiciones divergentes en cuanto a alineamientos geopolíticos, entre atlantistas y euroasianistas, respecto de la relación con China, o sobre la invasión de Ucrania.

Estos seis nodos temáticos son abordados, de manera exhaustiva, en el Proyecto 2025, elaborado por el *think-tank* conservador Fundación Heritage y otras organizaciones de cara a las elecciones presidenciales de 2024. Aunque al principio Trump no lo reconoció como programa de gobierno, su actuación y propuestas responden de forma fiel a sus propuestas. Consta de varios elementos y el más relevante es el extenso *Mandato para el liderazgo* (Dans y Groves, 2024), que establece las líneas maestras de la política «conservadora» —así se autodefinen las derechas neopatriotas en Estados Unidos— para el retorno de Trump a la presidencia. Buena parte de la atención se dirige al Gobierno federal, a los organismos públicos y a su personal técnico y de carrera, que el trumpismo denomina «Estado profundo». Afirmando que «el problema viene de dentro», se señala a un *establishment* que consideran «mayoritariamente izquierdista», subordinado a agendas *woke* y a «ingeniería social» (teoría crítica racial, igualdad, feminismo, LGTBIQ+, clima). Se le considera contrario al interés nacional y la defensa de Estados Unidos; que adopta decisiones de manera independiente y por ello obstaculiza el mandato presidencial. La propuesta, radical y muy ideologizada, es una purga inmediata y generalizada del funcionariado y el servicio exterior sustituyendo ese personal por nombramientos políticos (*political appointees*) conservadores. Para ello se propone crear una base de datos —un «Linkedin conservador»— para que cualquier persona corriente que sea fiel al presidente pueda ocupar puestos en la administración (Dans y Groves 2023: 88). De esa forma se evitarán controles y frenos legales a la acción política de la presidencia. La actuación de Elon

Musk y DOGE no debería sorprender, pues responde exactamente a estas propuestas.

Respecto a la política económica, el cuestionamiento a la globalización es claro: «Por varias décadas, las “elites” del *establishment* le han fallado a la ciudadanía rehusando controlar las fronteras, subcontratando la manufactura a China y otros lugares, gastando imprudentemente, regulando constantemente y, finalmente, controlando el país de arriba abajo en vez de dejar que florezca desde abajo» (Dans y Groves, 2023: 657). Sin embargo, el Proyecto 2025 reconoce que en política comercial hay dos visiones, que se enfrentaron en el primer mandato de Trump sin que emergiera una estrategia clara: la contribución de Kent Lassman, presidente del Competitive Enterprise Institute, defiende el libre comercio con todas las naciones; pero el capítulo redactado por Peter Navarro, que fue consejero presidencial de Trump en su primer mandato, expresa la posición más influyente de cara al segundo: se inclina por el proteccionismo, critica la deslocalización, y pretende recuperar capacidad manufacturera, con especial énfasis en la industria de defensa. Es beligerante con el presunto espionaje y piratería industrial de China, que permitieron una relación «injusta, desequilibrada y no recíproca» con ese país, con el que Estados Unidos debe buscar el desacoplamiento económico.

Como en la primera etapa de Trump, el Proyecto 2025 reclama la retirada de los grandes tratados internacionales y de acuerdos no formales que se consideran dañinos para la soberanía nacional e imponen costes elevados, y que termine «el apoyo a ciegas de las organizaciones internacionales», considerando la retirada de aquellos que no respondan al interés nacional de Estados Unidos. Cuestiona, en particular, que promuevan «políticas sociales radicales como si fueran prioridades de derechos humanos», reclamando que se reorienten a «promover una saludable cultura de respeto a la vida, la familia y la soberanía» como «fundamentos de la sociedad humana» y «verdaderos derechos humanos», con un expreso rechazo del aborto y a «la limitación de los derechos humanos en nombre de la salud» (Dan y Groves 2023: 191).

El Proyecto 2025 subordina el conjunto de la política exterior —como también ocurre con la política comercial— a la defensa nacional, con un discurso marcadamente securitario. Define como principal peligro a China y su política expansionista en Asia, abogando por una estrategia defensiva (*denial defense*) que haga inviable el control o subordinación de Taiwán y otros países de

la región, pero con un límite: ha de ser «al coste que los estadounidenses estén dispuestos asumir». No asume la posición radical de sectores republicanos —y en ocasiones expresada por Trump— en favor de abandonar la OTAN, pero sí plantea que la seguridad en Europa y la disuasión ante Rusia sea asumida por los propios europeos, dejando el paraguas nuclear estadounidense, que debe ser modernizado, como último recurso. Considera el control migratorio como asunto central de la política exterior y propone una rigurosa reevaluación de «quién es amigo y enemigo». Además de China, vista «más como amenaza que competidor», otros países por batir son Irán, Venezuela, Rusia y Corea del Norte. El Proyecto 2025 reconoce que la guerra de Ucrania y la relación con Rusia es un asunto que «divide a los conservadores», (Dan y Groves 2023: 181). Es una cuestión clave para las tres visiones de política exterior en liza en el trumpismo (Belin *et al.* 2024): a) los restrictivos (*restrainers*), enfocados en la agenda interna y con tendencias aislacionistas; b) los «priorizadores», que piden centrarse en Asia y en confrontar a China; y c) los «primacistas», que abogan por una política de supremacía global. Para las dos primeras la prioridad es China. Ello implica dejar a un lado el compromiso noratlántico y traspasar la seguridad de Europa a los europeos, reduciendo la ayuda a Ucrania y forzando así un acuerdo de paz favorable a Rusia. Como se detalla más adelante, es ese enfoque el que la administración Trump ha mostrado en febrero de 2025, en las reuniones con los europeos en el grupo de Ramstein o en la Conferencia de Seguridad de Múnich, en la que el vicepresidente J. D. Vance lanzó un discurso muy ideologizado a favor de los integrantes europeos de la internacional reaccionaria de la que forma parte el trumpismo (*The Economist*, 2025d; Rachman, 2025b). Pero las tres visiones son marcadamente unilateralistas y suponen un claro rechazo del multilateralismo y el «orden internacional basado en reglas» del internacionalismo liberal del que Estados Unidos había sido fundador y valedor (Walt, 2024; Cooley y Nexon, 2025). En las primeras semanas de la segunda presidencia de Trump, como se verá en los siguientes apartados, parece afirmarse una combinación entre la segunda y la tercera de esas posiciones.

## 2 Gobierno por decreto y democracia en cuestión: el giro trumpista en política interna

En la avalancha que da inicio a la segunda presidencia de Trump destacan, por su contenido y la deliberada espectacularidad de su

presentación, las órdenes ejecutivas anunciadas en el momento de la toma de posesión, relacionadas en su mayoría con los temas clave de la campaña electoral<sup>3</sup>. Es el caso de la inmigración, una cuestión que el trumpismo aborda en clave securitaria, nacionalista y de identidad, y que atañe, en particular, a su relación con América Latina, origen de buena parte de la población migrante en Estados Unidos. Supone el anuncio de deportaciones masivas que pueden llegar a afectar a varios millones de personas; la finalización del programa de admisión de refugiados, restricciones en política de visados, en particular contra determinados países musulmanes, y la pretensión, contra lo dispuesto en la 14.<sup>a</sup> enmienda a la Constitución, de dar fin al *ius solis* o derecho de ciudadanía por nacimiento en su territorio. Ello se ha justificado con una inverosímil teoría legal que los categoriza como «invasión» (Washington Office on Latin America, 2025) y la invocación forzada de legislación de excepción. Vinculado a la criminalización de la inmigración, Trump también adopta una política de mano dura o «ley y orden» en materia de seguridad ciudadana y ha restablecido la pena de muerte, interrumpida por Biden desde 2021. Los decretos presidenciales también contemplan un mayor control y la militarización de la frontera sur frente a la llegada de migrantes y el tráfico de drogas, en especial el fentanilo, que se presentan como «invasión». Frente a ello se decreta el despliegue de las Fuerzas Armadas y la categorización legal de los cárteles de la droga, en su mayoría mexicanos, como «organizaciones terroristas internacionales» a través de una lista que se hizo pública más tarde.

Muchas de las primeras medidas, de dudosa legalidad o abiertamente ilegales, suponen el desmantelamiento o cierre de importantes agencias del Gobierno federal, algunas de ellas proveedoras de servicios vitales, y el despido o renuncia forzada de decenas de miles de funcionarios, en algunos casos sustituidos por nombramientos políticos, apelando a argumentos de modernización digital, eficacia y rendición de cuentas. En realidad, esos cambios pueden verse como un intento de *weaponisation* del Estado (Levitsky y Way, 2025). Es decir, como instrumentalización partidaria de la administración y las políticas públicas y su uso clientelar contra sus oponentes políticos, y para favorecer los intereses empresariales que se han situado en el centro de su Gobierno. A esos objetivos responde la creación del Departamento de

<sup>3</sup> Un resumen comentado de esos decretos presidenciales u órdenes ejecutivas puede verse en *El Grand Continent* (2025b).

Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), bajo el mando directo del errático empresario Elon Musk. Con un confuso estatus legal, ha tomado el control *de facto* de áreas clave para el funcionamiento diario de los Departamentos del Tesoro o de Educación, ha accedido a información sensible de funcionariado y la ciudadanía, y ha adoptado decisiones de paralización del gasto y cierre de agencias federales, con el caso notorio de la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID). Ello usurpa competencias del Congreso, lo que ha supuesto algunas resoluciones judiciales limitando su actuación, que el ejecutivo pretende sortear (Jiménez, 2025b; Miller, Rogers y Murphy, 2025).

En pocas semanas, en el discurso y la práctica parece normalizarse la impugnación del Estado de derecho y la división de poderes, lo que puede dar paso a una crisis constitucional (Liptak, 2025). Ello está poniendo a prueba la solidez de los guardarraíles de la democracia en Estados Unidos, que el trumpismo ya impugnó con su intento de deslegitimar las elecciones presidenciales y la tentativa golpista que suponía el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. Entre sus primeras medidas, Trump ha indultado y rehabilitado de forma pública a sus responsables, presentándolos como luchadores por la libertad, cuando se trataba de graves delitos punibles. También se eliminan por decreto las restricciones a la desinformación, en nombre de la «libertad de expresión», con una moratoria al funcionamiento de la red de propiedad china TikTok, que ha sido funcional a las campañas de la ultraderecha en Estados Unidos y en otros lugares, ganando así tiempo para un posible cambio de propiedad a manos estadounidenses. Varios tecnopolios digitales se han sumado a esa política. Es el caso de Meta, compañía matriz de Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger Live y Threads, presidida por Mark Zuckerberg, que tras la victoria electoral de Trump decidió suprimir la moderación de contenidos en sus plataformas y redes, como ya hizo X (antes Twitter) tras su compra por Elon Musk. En sentido contrario, es también el caso de Jeff Bezos, propietario de Amazon y también del *Washington Post*, que ha censurado contenidos contrarios a Trump y ha impuesto una nueva línea editorial en ese periódico (*Financial Times*, 2025).

Estas acciones agravan la tendencia al deterioro democrático que Trump inició en su primer mandato. En la última década, Estados Unidos ha retrocedido en diversos indicadores referidos a la calidad y solidez de la democracia, hasta el punto de que desde 2016 es considerada una «democracia defectuosa» (*flawed demo-*

cracy) según la clasificación de The Economist Intelligence Unit (2024: 39). Con el segundo mandato de Trump, como han señalado Steven Levitsky y Lucan A. Way (2025), «la democracia está en su momento de mayor peligro que en cualquier otro momento de la historia de Estados Unidos» y existe un riesgo cierto de que su sistema democrático deje de responder a los criterios establecidos de una democracia liberal: sufragio pleno, elecciones libres y justas, separación e independencia de poderes y garantías para las libertades civiles. El resultado de esa deriva no es necesariamente una dictadura, sino un sistema de autoritarismo competitivo en el que se tolera a la oposición y aún hay elecciones, aunque no son libres ni justas. Ese sistema, ya afianzado, existe en otros países de Europa, como la Hungría de Viktor Orban, y también en la India de Narendra Modi, la Turquía de Erdogan, la Rusia de Putin o la Venezuela chavista en Latinoamérica, por mencionar algunos casos (Forti, 2024: 273).

Parte importante de esa primera andanada de decretos e iniciativas ha tenido como objeto dismantelar el «nuevo pacto verde» —que, en realidad, nunca llegó a ser adoptado— y acabar con las políticas para la transición ecológica de la denominada *bidenomics*, incluso derogando sus metas de electrificación del parque de automóviles. Por decreto, apelando a la legislación sobre emergencias, Trump declaró la «emergencia energética nacional». Así, recurre de nuevo a un discurso securitario, culpando a la administración Biden y sus políticas «verdes» del alza de precios de la energía, sin mencionar el legado de años de insuficiente inversión pública y privada en ese sector. Con esas órdenes ejecutivas se inicia la eliminación de incentivos y regulaciones ambientales para «liberar» la energía y los recursos naturales de los Estados Unidos, con disposiciones específicas para abrir áreas protegidas de Alaska a la exploración y explotación de petróleo y gas natural. También se detienen los desembolsos de los fondos de la ley de reducción de la inflación (*Inflation Reduction Act*, IRA) adoptada en la etapa Biden. En su discurso inaugural Trump resumió esta política con la expresión «*drill, baby, drill*» (Jiménez, 2025b). En el ámbito empresarial se puede ver un rápido abandono de los compromisos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés).

Al igual que ocurre con las políticas ambientales, parte de las órdenes ejecutivas y de las primeras medidas de la administración Trump, muy ideologizadas, se enmarcan en discursos de polarización contra las ideas y políticas del consenso centrista y

el progresismo liberal, que la ultraderecha denomina *woke*<sup>4</sup>. Pero no solo se trata de un marcador ideológico. Supone una importante erosión de los derechos civiles y de las políticas de discriminación positiva para reducir desigualdades y dinámicas de exclusión, que recibieron un fuerte impulso en el periodo Biden como respuesta al movimiento Black Lives Matter. Así, se derogan por decreto las medidas y órganos responsables en el Gobierno federal de las políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI), consideradas «radicales e innecesarias». Contra lo que la ultraderecha llama equívocamente «la ideología de género», en su discurso inaugural Trump declaró: «Pondré fin a la política gubernamental de tratar de imponer socialmente la raza y el género». Pero lo que decretó fue justo el uso obligatorio en el Gobierno federal —por ejemplo, en pasaportes y documentos oficiales— de las categorías «hombre y mujer» y sexo, en lugar del término género, basándose en hechos estrictamente biológicos, considerados «naturales e inmutables», como único criterio de identidad y fundamento de los derechos civiles. En el mundo empresarial ese giro también se observa incluso antes de la toma de posesión de Trump:

«Las empresas están eliminando departamentos de diversidad, equidad e inclusión, reduciendo su apoyo a organizaciones benéficas de diversidad racial y abandonando grupos de cambio climático. También están eliminando todo lo que pueda percibirse como *woke* de las declaraciones públicas, los documentos corporativos y la publicidad. La elección ha dado poder a algunos altos ejecutivos para empezar a hablar a favor de políticas conservadoras, desde recortes de impuestos hasta roles de género tradicionales» (*Financial Times*, 2025a).

Entre las derivadas de esta agenda *antiwoke* se encuentra la ofensiva lanzada contra la ciencia y el conocimiento experto, lo que ha debilitado las agencias federales responsables del monitoreo del clima y la investigación en vacunas —una de las «dos bestias negras» del trumpismo—, o la elaboración de listados de términos que han sido proscritos en las publicaciones de organismos públicos en el ámbito de la salud o el clima, o para la obten-

---

<sup>4</sup> Este término, inicialmente referido a la conciencia antirracista (*stay woke*), ha terminado siendo una expresión despectiva utilizada por la ultraderecha contra todos los movimientos e ideas progresistas y «concienciadas».



ción de financiación en los organismos y programas federales de investigación (Sun, Keating y Nirappil, 2025).

### 3 *America First*: política exterior, comercio y unilateralismo

La primera presidencia de Donald Trump ya estuvo marcada por el rechazo al multilateralismo y una agresiva política comercial y en materia migratoria. Así lo mostró la retirada del Acuerdo de París y la OMS, junto con UNESCO y el Consejo de Derechos Humanos, después revertidas por Biden. Trump también adoptó políticas abiertamente proteccionistas, bloqueando la OMC, e inició guerras comerciales y tecnológicas con China y otros socios. Como se mencionó, un rasgo de la radicalización, o «trumpización», del Partido Republicano en esta etapa fue el abandono de su tradicional visión liberal de la política comercial. En ese marco emerge la singular política exterior transaccional de Trump. A ello se suma el endurecimiento de la política migratoria, que marcó las relaciones con México. También profundizó el giro estratégico de Estados Unidos hacia el Indopacífico, iniciado por Obama, en perjuicio del vínculo transatlántico y el compromiso de Estados Unidos con la OTAN y la seguridad en Europa, denunciando acuerdos clave de limitación y control de armamentos como el Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio (INF), lo que alimentó la actitud revisionista de Rusia respecto de Ucrania y terminaría siendo uno de los argumentos esgrimidos por Putin para justificar la invasión.

En su segundo mandato hay elementos de continuidad en el rechazo al multilateralismo y el orden internacional liberal, pero también se observa un marcado endurecimiento de la política exterior y en materia comercial. Reaparece la política exterior *America First*, con una orden ejecutiva breve, pero de amplio alcance, dirigida al secretario de Estado, Marco Rubio, para que la actuación de su departamento anteponga los intereses de Estados Unidos sobre cualquier otra consideración. Ello alude a los compromisos multilaterales de Estados Unidos y al derecho internacional, sobre los que, ya en las primeras decisiones y anuncios, hay hechos inquietantes que muestran una política más agresiva respecto a lo ocurrido en su primera presidencia. Con una retórica que combina victimismo y supremacismo, argumentos que en última instancia invocan la seguridad nacional, y un discurso que evoca al Estados Unidos más imperialista, Trump y su Gobierno han lanzado amenazas directas a la soberanía e inte-



gridad territorial de varios países o territorios, en particular en las Américas, como es el caso de México, Panamá y Groenlandia, territorio autónomo dependiente de Dinamarca. Sobre todo ha utilizado los aranceles, el comercio, el acceso a la tecnología o los visados como instrumentos coercitivos (*the weaponization of everything*).

En Medio Oriente, ha apoyado abiertamente al Gobierno ultraderechista de Israel, anunciando que Estados Unidos «tomaría el control de Gaza», avalando también la «limpieza étnica» y las deportaciones masivas que reclama el sionismo radical, con el que converge de manera creciente la derecha religiosa estadounidense que apoya a Trump. Para ello, ha presionado a países africanos para que acepten refugiados de Gaza y ha amenazado de forma abierta a Egipto y Jordania con retirar la ayuda si no aceptan a los gazatíes expulsados de ese territorio para hacer posible el peculiar plan inmobiliario de Trump, de tintes libertarios, que pretende convertir a Gaza en la «riviera» de Medio Oriente. Una de las primeras medidas de Trump fue justamente derogar las primeras y únicas sanciones adoptadas por la administración Biden a los colonos radicales que habían perpetrado actos violentos contra los palestinos en la Cisjordania ocupada por Israel. Con relación a Irán, ha anunciado una política más enérgica, en asociación con Israel, en la que no se descarta el uso de la fuerza frente a su programa nuclear y el consiguiente riesgo de conflicto regional, que la administración Biden, junto con la Unión Europea, habían tratado de evitar.

Trump también ha planteado una agresiva agenda de exigencias a sus tradicionales aliados en Europa, a los que pretende situar en una relación de abierta subordinación estratégica. Ello también anuncia el fin del vínculo transatlántico tal y como existía hasta ese momento y, si algo lo ilustra con claridad, es el giro de ciento ochenta grados que se ha producido en la posición estadounidense ante la invasión rusa de Ucrania, un giro que ya se anunciaba en la posición del Partido Republicano durante el mandato de Biden. Hay varios hitos clave en ese viraje, que ha provocado estupor, inquietud e indignación, en distinto grado, en los gobiernos europeos: el primero es la intervención del secretario de Defensa, Pete Hegseth, en la reunión del 12 febrero de 2025 del grupo de Ramstein, encargado de coordinar la asistencia militar a Ucrania. En ese encuentro, primero que se celebraba con la administración Trump, Hegseth reafirmó que la prioridad estratégica para Estados Unidos es el Indopacífico y la conten-

ción de China, y no Europa, de cuya seguridad deberían hacerse cargo los europeos con mayor gasto militar. En particular, de cara a un posible cese el fuego entre Rusia y Ucrania —sobre el que en ese mismo momento dialogaban directamente Trump y Putin—, anunció su voluntad de imponer un costoso y arriesgado despliegue en Ucrania de tropas capaces, «europeas y no europeas», sin la cobertura de la OTAN, al tiempo que descartaba las consultas o la participación europea y de la propia Ucrania en unas conversaciones de paz bilaterales entre Estados Unidos y Rusia (Chávez *et al.*, 2025; Foy, Miller y Schwartz, 2025; *The Economist*, 2025d).

El segundo hito es la intervención del vicepresidente J. D. Vance el 14 de febrero en la Conferencia de Seguridad de Múnich, en vísperas de las elecciones generales en Alemania, con un discurso fuertemente ideologizado e identitario en contra del «wokismo» y a favor de la ultraderecha alemana y europea (*El Gran Continente*, 2025; Rizzi, 2025), en el que la administración Trump mostró que su política hacia Europa estaba más orientada al apoyo a esas fuerzas —y, por lo tanto, más cercana a Budapest y Moscú que a Bruselas—, que a otras consideraciones de política exterior (Rachman, 2025b).

El tercer hito es la reunión en la Casa Blanca del 28 de febrero, en la que Trump y Vance trataron de humillar de forma pública a Zelensky haciéndole saber que «no tenía cartas» y que debía aceptar una paz favorable a Rusia, además de un desfavorable acuerdo para la explotación de minerales y tierras raras por parte de Estados Unidos (Vidal, 2025). Las amenazas y presiones de Trump continuaron en días posteriores, con informaciones confusas sobre la desconexión de los terminales de Starlink, propiedad de Elon Musk y herramienta vital para las comunicaciones militares ucranianas, y el anuncio de la suspensión de la ayuda militar y de inteligencia de Estados Unidos apenas una semana después de choque en la casa Blanca (Politi *et al.*, 2025).

Ese viraje tiene implicaciones sistémicas: por un lado, en la práctica Estados Unidos abandona su compromiso noratlántico y pretende, al tiempo, establecer una relación de subordinación —o de abierto vasallaje, como en su momento la denominó el presidente Emmanuel Macron (Puglierin y Shapiro, 2023; Macron, 2024)— que sitúa a los europeos ante un doble dilema interconectado: entre fragmentación y unidad, y entre dependencia o autonomía estratégica. De hecho, esos acontecimientos provocaron una enérgica respuesta europea, que involucró tanto a la

UE y sus Estados miembros como al Reino Unido, en apoyo de Ucrania y en favor de una mayor autonomía política y en materia de defensa. Por otro lado, en lo referido a la guerra de Ucrania, se hacen importantes concesiones a Rusia antes incluso de comenzar una negociación abiertamente desigual que puede llevar a imponer una paz injusta y la partición *de facto* de Ucrania. Ello también supondría una Europa debilitada y con la amenaza de la reaparición de la guerra en su flanco oriental.

*America First*, como se ha indicado, supone un asalto frontal al multilateralismo y a las normas internacionales, que incluye la retirada de organizaciones y tratados como la Organización Mundial de la Salud o el Acuerdo de París sobre cambio climático, objeto expreso de sendas órdenes ejecutivas. En ambos casos, Trump ya decidió esa retirada en su primer mandato, que en 2021 fue revertida en ambos casos por la administración Biden. Estados Unidos también ha iniciado una revisión, a través de otra orden ejecutiva, de su membresía y contribuciones a otras organizaciones internacionales. El drástico cierre de USAID supone también dar fin, de manera abrupta, a un gran número de programas desarrollados conjuntamente o a través de programas, fondos y agencias operacionales de Naciones Unidas, así como a las contribuciones voluntarias de las que dependía su funcionamiento. También se anunció el fin de la cooperación sobre tributación internacional de las multinacionales desarrollado en el marco de la OCDE, y que se ausentará de las reuniones del G20. Uno de los casos más relevantes es la orden ejecutiva de febrero de 2025 por la que Estados Unidos, que no es parte de su estatuto ni admite su jurisdicción, puede imponer sanciones al personal de la Corte Penal Internacional (CPI) que haya participado en causas contra ciudadanos estadounidenses o países aliados, como Israel. No es la primera vez, pues en 2020 la administración Trump ya sancionó a la fiscal-jefe, Fatou Bensouda. En esta ocasión, la orden cita como «peligroso precedente» la decisión de ese tribunal de emitir órdenes de arresto contra el primer ministro Benjamín Netanyahu y el anterior ministro de defensa, Yoev Gallant, como sospechosos de cometer crímenes de guerra en Gaza, un territorio que sí es parte de la jurisdicción de la CPI (Roth, 2025). Trump adoptó esa orden presidencial coincidiendo con la visita de Netanyahu en Washington y el anuncio de que Estados Unidos tomaría el control de Gaza. De nuevo, el argumento es que las actuaciones de la CPI perjudican la seguridad nacional de Estados Unidos (Vidal y Ferrer, 2025).

Quizá uno de los cuestionamientos más directos al orden multilateral es el que representa la *America First Trade Policy*, adoptada el mismo día de la toma de posesión (The White House, 2025). Uno de los dos presidentes estadounidenses citados en el discurso inaugural fue William McKinley, conocido como «el Napoleón del proteccionismo», que, mientras era representante, impulsó en 1890 el «arancel McKinley», que aumentó ese gravamen —en promedio— entre 38 % y 50 % a todas las importaciones. Con la amenaza de aranceles elevados, y la intención de emplear como instrumento coercitivo las inversiones y la tecnología, Trump ha abierto nuevos frentes en sus guerras comerciales. De mucho mayor alcance que las iniciadas en su primer mandato, suponen una intensificación del nacionalismo económico y el proteccionismo y un nuevo golpe a una globalización ya en crisis, de consecuencia impredecibles. Así, más que un efecto no deseado, se genera incertidumbre como herramienta de presión.

La administración Trump afirma expresamente que la política comercial es un componente crítico de la seguridad nacional y considera amenazas a la misma los déficits comerciales persistentes que Estados Unidos registra con sus principales socios comerciales, que Trump y su Gobierno califican de forma equivocada de «subsidios» a otros países. En su formulación general, con esta política se ordena una revisión de todos los acuerdos comerciales de los que participa Estados Unidos, y en particular del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá (T-Mec o USMCA, por sus siglas en inglés), de cara a su revisión prevista para 2026. No obstante, esos dos países ya han sido objeto de la amenaza directa de aranceles en varias ocasiones para que actúen frente a la migración y el fentanilo, lo que ilustra la forma en la que la administración Trump utiliza los aranceles como instrumento coercitivo en política exterior. La orden presidencial también propone crear un servicio de ingresos externos federal y apunta a las políticas cambiarias, en búsqueda de prácticas desleales de manipulación y desalineamiento de los tipos de cambio; a las cláusulas *de minimis*, que podrían permitir el contrabando y el acceso ilegal de fentanilo, y a las relaciones con China —a la que se aplicó un nuevo arancel del 10 %, que se sumaban a las ya adoptadas en el primer mandato de Trump, que en muchos casos se mantuvieron con Biden— y a otros socios comerciales, incluyendo sus normas de protección de la propiedad intelectual y las patentes. También reclama revisar los controles a la exportación de tecnologías sensibles y una evaluación general de la seguridad económica de Estados Unidos y de su base industrial

y manufacturera, con mención especial al acero y al aluminio, para lo que pocos días después se instauró un arancel general del 25 % a aplicar desde marzo de 2025. Las amenazas de aranceles también se extienden a los países del grupo BRICS en caso de que busquen alternativas frente a la supremacía del dólar como moneda de reserva internacional (Williams, 2024).

Muchas de estas medidas, como las adoptadas en el primer mandato de Trump, se acogen a las salvaguardas de seguridad nacional de la OMC o del T-Mec. En otros casos, como la amenaza de aranceles a México y Canadá, ha recurrido a la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional. Esta presume la existencia de una amenaza extraordinaria que, en este caso, es más un recurso discursivo de Trump que una realidad tangible. Suponen un uso abusivo de esas normas, que es difícil que sea impugnado ante la OMC, cuyo órgano de resolución de diferencias quedó bloqueado por la primera administración Trump desde 2019. Sin embargo, la propuesta de adoptar aranceles recíprocos a todos los países, lanzada a mediados de febrero de 2025 al amparo de la política comercial *America First*, puede hacer saltar por los aires la arquitectura del sistema multilateral de comercio, forjada durante décadas (Beattie, 2025b). Partiendo, de nuevo, de un discurso victimista y argumentos de seguridad nacional, Estados Unidos pretende aplicar a partir de abril de 2025, país por país, un arancel cuya cuantía se establecería a partir de unos peculiares cálculos que incluyen, junto con los aranceles, barreras no arancelarias, la política cambiaria, diferenciales salariales, o impuestos «injustos, arbitrarios o excesivos». Trump ha señalado, por ejemplo, el impuesto sobre el valor añadido (IVA) europeo, que no tiene equivalente en Estados Unidos, calificándolo de «estafa» (Jiménez, 2025c). Brasil, India, Japón, Canadá, Sudáfrica, de nuevo México o Canadá, y la UE podrían ser los más afectados (Williams *et al.*, 2025b). Está por ver hasta qué punto este plan es aplicable y si se trata más bien de una herramienta de presión y negociación. Pero su posible aplicación supondría acabar con la cláusula de nación más favorecida (NMF) y el principio de no discriminación, que es la piedra angular de la OMC, del sistema multilateral de comercio y, de manera más amplia, de un orden internacional basado en reglas.

Todo parece ser válido también para la defensa de determinados intereses empresariales estadounidenses. A través de una orden ejecutiva que, de nuevo, apela a la seguridad nacional como argumento último, Trump ordenó al Departamento de Justicia

que se abstuviera de aplicar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de 1977. Ello permite que las empresas de Estados Unidos vuelvan a recurrir al soborno de funcionarios de otros Gobiernos para obtener contratos y concesiones, haciéndolas más competitivas frente a las de otros países a la hora de acceder a materias primas críticas o infraestructuras de importancia estratégica. Pero ello puede alentar un «carrera hacia abajo» por parte de empresas de otros países, erosionando estándares globales en este ámbito (Beattie, 2025a). La decisión significa también incumplir la «convención contra el soborno» (*anti-bribery convention*) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Adoptada en 1997, cuenta con 46 Estados parte, incluyendo Estados Unidos, entre ellos todos los demás miembros de esa organización internacional (Chávez y Palma, 2025).

#### 4 Trump 2.0 y América Latina: el retorno de la retórica imperial y la coerción a las relaciones hemisféricas

En su discurso inaugural y en la rueda de prensa previa en Mar-a-Lago en enero de 2025, Trump revivió de manera expresa la doctrina del destino manifiesto para fundamentar el nuevo papel que Estados Unidos espera jugar en el mundo. Esa doctrina está basada en el excepcionalismo y el providencialismo, a los que también aludió, que están enraizados en la identidad y la cultura política estadounidense y son parte de su relato fundacional (Palomares y García, 2019: 22). Por ese motivo, han fundamentado tanto el expansionismo y el imperialismo estadounidenses del siglo XIX y las primeras décadas del XX como el idealismo wilsoniano o el internacionalismo liberal presente en la política exterior y la hegemonía estadounidense. Esas ideas, además, son especialmente importantes para entender su relación hegemónica con América Latina y, en un sentido más amplio, lo que Estados Unidos denomina «el hemisferio occidental», un concepto que se relaciona con esas doctrinas. Ese concepto geopolítico parte de la idea de que sus procesos de independencia respecto al viejo mundo situaron a las nuevas repúblicas americanas en «otro» hemisferio desde el punto de vista político, y no solo geográfico, en el que Estados Unidos se atribuye una posición predominante.

Sin rubor, en el discurso inaugural Trump definió a Estados Unidos como «la mayor civilización de la historia», y afirmó expresamente que: «Estados Unidos pronto será más grande, más fuerte

y mucho más excepcional que nunca [...] Estados Unidos reclamará su lugar legítimo como la nación más grande, más poderosa y respetada de la Tierra inspirando el asombro y la admiración del mundo entero». Su destino manifiesto vuelve a ser, según Trump, la supremacía mundial y la expansión territorial: «Estados Unidos volverá a considerarse una nación en crecimiento, que aumenta su riqueza y expande su territorio [...] y perseguiremos nuestro destino manifiesto hacia las estrellas [...] el espíritu de frontera está en nuestros corazones». Quizá es una figura retórica, pero a tenor de amenazas posteriores, esa voluntad expansionista no debe tomarse a la ligera. Además del espacio exterior, Trump también ha aludido a Canadá, Groenlandia y Panamá, en estos dos últimos casos sin descartar el uso de la fuerza. Con Canadá, que denominó «el estado número 51 de la Unión», «[...] no vamos a utilizar la fuerza militar, pero sí la fuerza económica» (*El Grand Continent*, 2025a: 2).

Según Stewart Patrick (2025), todo ello muestra que Trump tiene una visión distorsionada de la soberanía y el excepcionalismo de Estados Unidos, que, además, revela una concepción palin-genésica, habitual en la ultraderecha (Griffin, 2007), que vincula la presidencia de Trump con un pasado idealizado —*Make America Great Again* o MAGA— al afirmar que «la edad de oro de Estados Unidos comienza ahora mismo». Se trata también de una reafirmación del providencialismo estadounidense: «Somos un pueblo, una familia y una gloriosa nación bajo Dios». La providencia divina ahora se extendería también a la propia elección de Trump: refiriéndose al atentado en Pensilvania, afirmó que «Dios me salvó para hacer a Estados Unidos grande de nuevo».

Ahora Trump recupera esas doctrinas en una particular declinación neoimperial. Sobre Groenlandia, en Mar-a-Lago declaró: «Necesitamos Groenlandia por razones de seguridad nacional», al tiempo que puso en duda el derecho de Dinamarca sobre ese territorio, la amenazó con aranceles (*El Grand Continent*, 2025a: 3). Posteriormente ha presionado de forma directa a su Gobierno (Milne, Rachman y Politi, 2025) a favor de un referéndum de autodeterminación —al que da derecho el actual estatuto de autonomía de Groenlandia— que, en caso de obtener la independencia, podría situar a Groenlandia en la órbita de Estados Unidos. Sobre el canal de Panamá, con un discurso revisionista, Trump reivindicó el papel de Estados Unidos en su construcción y lamentó los Tratados Torrijos-Carter de 1973, por los que Panamá obtuvo, con condiciones, el control y la soberanía de esa vía de



agua, alegando que se habrían violado con la supuesta entrega del canal a China. «El Canal de Panamá es vital para nuestro país», dijo en Mar-a-Lago. En su discurso añadió «Se nos ha tratado muy mal con ese tonto regalo que nunca debió hacerse, y se ha roto la promesa que Panamá nos hizo [...]. Y, sobre todo, China está operando el canal de Panamá. Y nosotros no se lo dimos a China. Se lo dimos a Panamá y vamos a recuperarlo».

Como única mención a sus antecesores en el cargo, en su discurso aparecen William McKinley y Theodore Roosevelt. Ambas fueron figuras clave del imperialismo estadounidense de finales del siglo XIX e inicios del XX, que incluye episodios como las leyes arancelarias y la anexión de Puerto Rico, Guam, las Filipinas o Hawái, la secesión de Panamá y el inicio de la construcción del canal, o la guerra de Cuba. En esa línea, Trump decretó el cambio de nombre del golfo de México por «*Gulf of America*», cambio que un solícito Google Maps se apresuró a aplicar para las conexiones realizadas desde Estados Unidos. Todos estos elementos llevan a Zaki Laïdi (2025) a afirmar que Trump es un nacionalista imperial, como otros líderes estadounidenses del siglo XIX. Gideon Rachman (2025a), por su parte, afirma que la voluntad expansionista de Trump converge con un patrón de reclamos de territorio y de culto al «hombre fuerte» en la política mundial que también se observa en la Rusia de Putin y la China de Xi Jinping, en este caso centrada en Taiwán.

La importancia de América Latina en la política exterior *America First* fue destacada por el secretario de Estado, Marco Rubio, para el que esa política «significa poner atención especial a nuestra propia vecindad, el hemisferio occidental» (Rubio, 2025). Para ello, Rubio define cuatro prioridades: en primer lugar, detener la inmigración mediante la externalización del control migratorio y lograr la aceptación del retorno forzado de aquellos que sean deportados desde Estados Unidos. «Los países que colaboren con esa política con entusiasmo serán recompensados. Aquellos que no, Estados Unidos ya ha mostrado la voluntad de utilizar su poder», señaló Rubio en referencia a las amenazas con las que se doblegó la resistencia de Colombia en días previos. La segunda es contener a China. Según Rubio, el covid expuso la fragilidad de las dependencias de Estados Unidos a cadenas de suministros alejadas. «Reubicar nuestras cadenas de suministro críticas en el hemisferio occidental abriría un camino para el crecimiento económico de nuestros vecinos y salvaguardaría la propia seguridad económica de los estadounidenses». El Proyecto 2025 tam-



bién ha apostado por la relocalización productiva en la vecindad latinoamericana (*re-shoring* o *re-hemisphering*) funcional al desacoplamiento con China. Ello, además, reduciría la presión migratoria y aumentaría los ingresos fiscales para combatir la inseguridad en cada país. La tercera es combatir a los cárteles de las drogas, ya categorizados como organizaciones terroristas. Para América Latina, el Proyecto 2025 también reclama un enfoque de «seguridad local», lo que podría interpretarse como respaldo a la «bukelización» de las políticas de seguridad en cada país. Ese reclamo de políticas de seguridad es de especial relevancia para México, considerado «un desastre de seguridad nacional» que «ha perdido su soberanía funcional ante los cárteles de la droga». Propone un «México soberano» y una frontera «libre de fentanilo», asunto en el que, de nuevo, se apunta a la amenaza china. La cuarta prioridad, finalmente, es hacer frente a los regímenes ilegítimos de Cuba, Nicaragua y Venezuela y sus estrategias «para amplificar el caos» en la región.

La desaparición de USAID, organismo dependiente de la Secretaría de Estado, deja sin embargo a Estados Unidos sin una importante herramienta de política exterior para la región y la priva de una fuente de financiación para el desarrollo, en particular para los países más pobres y para un gran número de organizaciones de la sociedad civil, de apoyo a las mujeres y la igualdad de género, de defensa de los derechos humanos o el medio ambiente, y de apoyo al éxodo venezolano o a los refugiados nicaragüenses. El Proyecto 2025 había planteado una amplia reforma de USAID y la ayuda exterior de Estados Unidos, privatizando parte de sus actividades, con una especial referencia a las organizaciones confesionales. Sobre todo, proponía eliminar las políticas «globalistas» y *woke* (igualdad de género, clima, programas DEI, salud sexual y reproductiva, derecho al aborto...). Sin embargo, en modo alguno había propuesto su desaparición. Aunque América Latina y el Caribe solo recibían el 5 % de la ayuda estadounidense, este país es el principal donante individual a la región. La congelación o cese de esas transferencias golpea más, en términos absolutos, a El Salvador, Honduras y Haití, y, como proporción de la ayuda total recibida, a Venezuela, Colombia, Guatemala y Jamaica (Mitchell y Hughes, 2025).

El endurecimiento de la política migratoria se traduce, en primer lugar, en la amenaza de detenciones y deportaciones masivas, que ya se ha iniciado a través de redadas intimidatorias y detenciones arbitrarias del servicio de inmigración y control de adua-

nas (ICE) y otros organismos de seguridad en distintos niveles de gobierno. Dependiendo del alcance de estas medidas, pueden llegar a afectar a catorce millones de personas, el 4,2 % de la población total estimada de Estados Unidos. Es difícil que ello se materialice, dado el fuerte peso de esa población en su fuerza laboral, pero incluso aunque afecte solo a una parte, va a generar un clima de miedo e inseguridad, favorecer la explotación laboral, y cerrar las vías para su regularización. Además, dañaría seriamente las economías de los países latinoamericanos y de las familias que dependen de las remesas de esos trabajadores. La administración Trump ya ha presionado a varios países —incluyendo regímenes como el de Venezuela— para que acepten a los deportados.

Las medidas de control fronterizo han significado la suspensión *de facto* del derecho de asilo, al impedirse la entrada en Estados Unidos «bajo ninguna circunstancia». El reinicio del programa *Remain in Mexico* y la suspensión de la *Humanitarian parole* o estatuto de protección temporal dejan en situación vulnerable a deportaciones a medio millón de personas procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y, sobre todo, venezolanos que, en una alta proporción, habían apoyado a Trump. La suspensión de la 14.<sup>a</sup> enmienda puede dar lugar a un gran número de niñas y niños apátridas y sin derechos, en su mayoría de origen latino (Washington Office on Latin America, 2025).

Esta cuestión provocó el primer choque entre la administración Trump y un Gobierno latinoamericano, el colombiano. Aunque Colombia ya recibía vuelos con deportados de Estados Unidos, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se negó a admitir nuevas llegadas en aviones militares de Estados Unidos en condiciones consideradas indignas. Un día antes, Brasil había emitido una nota de protestas por esa misma cuestión. La respuesta de Trump fue tajante. Anunció aranceles inmediatos del 25 % a todas las exportaciones colombianas, y de 50 % una semana después, además de restricciones de viaje y revocación de visados a funcionarios del Gobierno colombiano e inspecciones reforzadas de aduana a los ciudadanos de ese país. Fue el primer anuncio de la *weaponization* de los aranceles en América Latina tras iniciarse el segundo mandato de Trump. Aunque Petro anunció aranceles recíprocos, Colombia reuló en cuestión de horas, al tener presente que Estados Unidos es el principal destino de sus exportaciones, con un 26 % del total en 2023 (Daniels et al., 2025). Colombia, además, no tuvo respaldo de la región. La

convocatoria urgente de una reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) por parte de la presidenta Xiomara Castro, de Honduras, que ejerce la presidencia *pro tempore* de ese organismo, no logró el mínimo consenso para que pudiera celebrarse, y aún menos para respaldar a Colombia. Ello mostró de nuevo que la fragmentación ideológica de la región, agravada tras las elecciones fraudulentas en Venezuela, sigue gravitando sobre los organismos de cooperación e integración regional y debilita su agencia.

El segundo escenario de tensión, claramente anunciado por Trump, fue Panamá. La importancia del canal es conocida. Cada año, lo atraviesan unos treinta mil barcos, que representan en torno al 3 % del comercio marítimo mundial, el 40 % del tráfico de contenedores con origen o destino en Estados Unidos, y sigue siendo un paso clave para la marina de guerra de ese país y su proyección global. En realidad, las afirmaciones de Trump sobre el «control chino» del canal —alegando, incluso, la presencia de militares de ese país— no tenían fundamento: bajo soberanía panameña, con un estatuto de neutralidad acordado en los Tratados Torrijos-Carter, su administración depende de la Autoridad del Canal de Panamá, un organismo independiente. Esas acusaciones, en todo caso, remiten a las concesiones para operar los puertos de Balboa, en la costa del Pacífico, y de San Cristóbal, en la costa atlántica, a la Compañía de Puertos de Panamá, filial de CK Hutchinson Holdings, grupo privado con sede en Hong Kong, que gestiona 53 puertos en 24 países, incluyendo el Reino Unido y Alemania. Otorgadas en 1997, en 2021 fueron renovadas sin licitación por otros 21 años y, en 1999, el Departamento de Estado no encontró evidencias de que a través de esas concesiones China pudiera estar en posición de controlar las operaciones del canal (Roy, 2025; Davidson, 2025). Por otro lado, en 2017, durante el primer mandato de Trump y sin protestas por su parte, Panamá entabló relaciones diplomáticas con la República Popular China, se asoció a la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI) y, de acuerdo con la política «una sola China» de ese país, dio fin a sus relaciones con Taiwán. Respecto al aumento de tarifas de paso —otra reclamación estadounidense—, se relacionaban en realidad con una fuerte sequía que impidió mantener la frecuencia habitual de paso en esa vía de agua.

Por otro lado, Estados Unidos mantiene un contencioso abierto con Panamá sobre migración. El «tapón del Darién», en la frontera con Colombia, se ha convertido en una importante vía de

paso de migrantes con destino a Estados Unidos, que hacen esa ruta a pie, atravesando un territorio selvático y hostil, y a merced de grupos ilegales. En 2023, año récord, fueron unos 523 000 y en 2024 descendió a unos 302 000, como resultado de las medidas de control acordadas con la administración Biden.

A principios de febrero de 2025 Panamá fue precisamente el destino de la primera visita al exterior de Marco Rubio como secretario de Estado, que planteó al Gobierno de José Raúl Mulino la exigencia de «reducir la presencia china o enfrentar acciones» por parte de Estados Unidos. Frente a las protestas internas, Mulino desplegó una fuerte retórica nacionalista reivindicando la soberanía panameña sobre el canal y cuestionó esas acusaciones, pero cedió rápidamente a lo requerido por Rubio. Anticipándose a la visita, Mulino ordenó una auditoría sobre Puertos de Panamá, con el previsible propósito de rescindir las concesiones (Murray y Ho-him, 2025), pero al final fue innecesaria. Ante esas presiones, CK Hutchinson se apresuró a vender el 90 % de Puertos de Panamá al fondo de inversión estadounidense Blackrock (Platt *et al.*, 2025). Mulino también anunció que Panamá no renovaría su participación en la iniciativa BRI, prevista para 2026, y congeló las conversaciones sobre libre comercio con China (*The Economist*, 2025c). Se comprometió a su vez a endurecer el control migratorio, a aceptar migrantes deportados —tanto panameños como de otras nacionalidades—, a facilitar el acceso a información sobre lavado de dinero y a otorgar libre paso a los buques de guerra estadounidenses, aunque Mulino ha negado esto último en público (Stott y Rogers, 2025; Lauria, 2025).

Ese enfoque securitario respecto de la migración también dominó la visita de Marco Rubio a El Salvador, un país en rápido proceso de autocratización legitimado por sus políticas punitivistas y de mano dura contra la delincuencia. En esa visita, su presidente, Nayib Bukele, además de celebrar el cierre de USAID, aceptó envíos de salvadoreños deportados y ofreció a Estados Unidos externalizar parte de su sistema carcelario, internando en las prisiones de alta seguridad salvadoreñas «inmigrantes ilegales violentos de cualquier país» y ciudadanos estadounidenses o residentes legales a cambio de un «modesto pago» por esos servicios carcelarios a fin de «hacerlo sostenible». Rubio declaró que se trataba de «un gesto extraordinario nunca antes ofrecido por ningún país» (Murray, 2025). Ese acuerdo se materializó en marzo de 2025, lo que provocó una seria crisis interna en Estados Unidos. Pese a la prohibición expresa de un juez federal, cuya

orden ridiculizó en las redes sociales el propio Bukele, la administración Trump envió a El Salvador y a Honduras varios cientos de deportados. De nuevo, se apeló de manera forzada a una ley de excepción de 1789 sobre expulsión de enemigos de Estados Unidos, alegando que eran parte de la Mara Salvatrucha (MS-13) de El Salvador y de la organización criminal venezolana El Tren de Aragua (Seisdedos, 2025).

La amenaza de aranceles de un 25 % a México y Canadá —10 % para los productos energéticos de este último— también se basó en los poderes presidenciales de la legislación sobre emergencias y el argumento securitario de la «invasión» de migrantes y fentanilo. Anunciados al mismo tiempo que el arancel adicional de 10 % a China, podrían afectar a cerca de un billón de dólares en importaciones, sobre todo originarias de México, que en 2021 ya había superado a China como principal proveedor externo de Estados Unidos. Con un alcance mucho mayor que cualquier otra medida adoptada por Trump en su primer mandato, podrían inducir fuertes tensiones inflacionarias y una recesión global que algunas caídas en bolsa, ya en marzo de 2025, podrían estar anticipando. Sectores altamente integrados en el mercado regional norteamericano, como el del automóvil, se tornarían inviables en ese escenario. Como referencia, alrededor del 50 % de los componentes utilizados en Estados Unidos en ese sector vienen de México y Canadá, y las tres compañías más afectadas —Ford, General Motors y Stellantis, que integra la antigua Chrysler— tienen capital estadounidense. Ese riesgo de recesión económica gravitaría, en particular, sobre una América Latina que en el decenio anterior ha vivido una segunda «década perdida», con tasas de crecimiento más bajas que las registradas en la década de los ochenta tras la crisis de la deuda, y las más bajas desde la segunda guerra mundial (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2024). Ello pondría en cuestión los objetivos de *nearshoring* y de reducción de la presión migratoria que la propia administración Trump dice promover. La amenaza de una guerra comercial contra México y Canadá no tenía tampoco en cuenta que, con respecto a 2023, en la etapa Biden, los flujos migratorios desde México habían disminuido de manera notable y la interdicción de fentanilo por parte de ambos países había aumentado (*The Economist*, 2025a; *Financial Times*, 2025b).

Canadá respondió a esas amenazas anunciando un arancel de 25 % a una lista de productos estadounidenses por valor de treinta mil millones de dólares, ampliable a 125 000 millones en

tres semanas. México, por su parte, anunció medidas arancelarias y no arancelarias sin detallar, al tiempo que la presidenta Claudia Sheinbaum rechazaba las afirmaciones de Trump sobre la «alianza intolerable» de los cárteles y las autoridades mexicanas, cuestionaba la tolerancia estadounidense con el tráfico de armas y el consumo de fentanilo y reclamaba diálogo, en vez de medidas coercitivas. Las conversaciones bilaterales entre Trump y Sheinbaum, por un lado, y Trudeau, por otro, condujeron a un acuerdo de última hora con concesiones por parte de ambos países en materia de control fronterizo, como el despliegue en la frontera norte de México de diez mil agentes adicionales de la Guardia Nacional de ese país o el nombramiento por parte del Gobierno de Canadá de un «zar» antifentanilo para coordinar las acciones contra el tráfico de esa sustancia. A cambio, Trump suspendía por un mes la aplicación de los aranceles (Jiménez y Camhaji, 2025). México hizo otras concesiones posteriores importantes, como la extradición de 29 narcotraficantes reclamados por Estados Unidos, algunos de ellos desde hacía décadas (Raziel y Ferri, 2025). Ello no impidió que Trump anunciara la imposición de aranceles transcurrido ese plazo, pero poco después anunció una excepción para el sector automotor y, al final, los dejó en suspenso. Ese proceso, en apenas mes y medio, contrasta con lo ocurrido con Panamá o Colombia y muestra que, ante las presiones de Trump, es inevitable hacer concesiones, pero que, donde hay fuertes interdependencias de coste recíproco y las asimetrías no son tan marcadas, hay margen de respuesta frente a las políticas de Trump (*The Economist*, 2025b). También revelaría la efectividad decreciente del uso unilateral, transaccional y errático de instrumentos coercitivos y la *weaponization* de las interdependencias frente a soluciones de largo plazo alcanzadas a través de la negociación y el acuerdo.

El caso de Venezuela puede ser un ejemplo de esa estrategia transaccional y, como en otros momentos, su importancia como exportador de petróleo y gas parece atemperar el celo ideológico con el que se abordan las relaciones con ese país. Como ya hiciera la administración Biden, Trump no ha reconocido el Gobierno de Nicolás Maduro y sigue calificando las elecciones como ilegítimas. Ello no impidió la visita del enviado especial Richard Grenell el 31 de enero de 2025 para reunirse con Maduro. Este accedió a liberar seis estadounidenses detenidos bajo acusaciones de conspiración contra el régimen y aceptó recibir a venezolanos deportados por las autoridades venezolanas sin que, aparentemente, Estados Unidos accediera a levantar ninguna de las sanciones.

Por otro lado, no hubo reuniones entre Grenell y la oposición, que fue tratada con desdén (Carquez y Reyes, 2025). Como ya se ha indicado, Estados Unidos considera ahora a Venezuela «país seguro» y Trump ha revocado el estatuto de protección temporal de la numerosa población venezolana que había sido acogida en Estados Unidos. Esa decisión ha provocado sorpresa y frustración en esa comunidad, habida cuenta del masivo apoyo político que había brindado al trumpismo. Sin embargo, ese entendimiento no impidió que, semanas más tarde, Trump revocara las exenciones de la empresa Chevron al régimen de sanciones aplicado a Venezuela, lo que supone un severo golpe a las exportaciones de crudo de ese país. Ello podría indicar que en el seno de la administración Trump existen distintas visiones respecto a la política por adoptar hacia ese país.

## Conclusiones

La rapidez e intensidad del cambio que trae consigo el segundo mandato de Trump, y su carácter a menudo contradictorio y errático, no debe llevar a la conclusión equívoca de que no existe estrategia y proyecto. Este trabajo ha mostrado un trumpismo más organizado, reflexivo y estratégico que el aparecido con el primer mandato. También se apoya, en el plano interno, en una «coalición MAGA» de fuerzas más amplia y con mayor presencia de los intereses empresariales de las grandes compañías tecnológicas. Y, en el plano externo, está más articulado con una internacional reaccionaria de fuerzas de ultraderecha de alcance global, lo que explica la primacía de los vectores ideológicos respecto a los intereses de política exterior tradicionales. Sin embargo, también son muchos los interrogantes respecto al alcance y consecuencias de esos cambios, y en la política exterior y la política comercial del *America First* se observan importantes inconsistencias y contradicciones. Un ejemplo evidente es el de las medidas arancelarias anunciadas y el escenario de incertidumbre generalizada y riesgo de recesión económica global creada por la *Trumponomics* frente a sus objetivos declarados de estabilidad y crecimiento económico y de relocalización manufacturera (*re-shoring* o *near-shoring*).

A principios del s. xx, coincidiendo con la formulación del corolario de Roosevelt a la doctrina Monroe y con una etapa de abierto imperialismo estadounidense en la cuenca del Caribe, ese presidente describía su política exterior con la frase «habla suavemente, y lleva un gran garrote; llegarás lejos». Trump



prefiere vociferar, y desde luego empuña un garrote, aunque su fuerza y tamaño, y la contundencia real de sus golpes aún no se perciben con claridad. En Panamá ha habido más voz que garrote, con un discurso que apelaba incluso al uso de la fuerza, más que la amenaza de aranceles que, por otro lado, hubieran sido poco relevantes en un país con una economía de servicios. El uso como garrote de los aranceles y de otros instrumentos coercitivos, políticos y económicos, como muestran los casos de Colombia o México, y la desaparición de las zanahorias, como ilustra el cierre de USAID, muestra a un Estados Unidos más hosco, pero también más transaccional y centrado en ganancias inmediatas, más que en una lógica cooperativa de largo plazo. El caso de la relación con Venezuela es, sin embargo, contradictorio y revela la contraposición de visiones ideologizadas frente a otras más transaccionales, centradas en los objetivos migratorios.

Pese a esos interrogantes y dilemas, este trabajo puede ofrecer una conclusión clara: el segundo mandato presidencial de Donald Trump, más radical, agresivo e ideologizado que el anterior, supone un punto de inflexión en la etapa de interregno que vive el sistema internacional, caracterizada por la crisis de la globalización y la creciente rivalidad geopolítica. El trumpismo actual supone un nuevo y más intenso cuestionamiento de la democracia liberal y el liberalismo económico en Estados Unidos y, en su vertiente externa, agrava la crisis de la globalización con una oleada de nacionalismo económico y de uso coercitivo o *weaponization* de las interdependencias. Amplifica el proceso de contestación del orden liberal internacional que protagonizan una amplia constelación de fuerzas de extrema derecha neopatriota en ascenso a escala global, con un ataque directo al multilateralismo y sus normas e instituciones. Somete también a una fuerte tensión los vínculos económicos, políticos y de seguridad con sus principales socios en Europa y en las Américas, en particular México y Canadá, con los que, además de fuertes lazos comerciales, ha de gestionar interdependencias migratorias y de seguridad relacionadas con actividades ilícitas. Esa política, agresiva y muy ideologizada, hace de Estados Unidos un socio errático e impredecible y un actor difícil de tratar para hacer frente a las necesidades de estabilidad, previsibilidad, confianza y cooperación que requiere en un sistema internacional altamente interconectado que enfrenta riesgos globales, con una gobernanza en crisis, y muy necesitado de reglas y certidumbre.



Esas políticas pueden también ser contraproducentes si de lo que se trata es de contener a China o los BRICS. Más allá de México, Centroamérica o los países de la cuenca del Caribe, donde históricamente Estados Unidos ha ejercido mayor presión, es difícil que Estados Unidos pueda imponerse; en Sudamérica, su capacidad coercitiva se debilita. La estructura exportadora de esa subregión, más ligada a China, reduce el margen de maniobra de la coerción económica estadounidense. Lo que hoy ofrece Trump es intimidación más que cooperación; palo, más que zanahorias; exigencias, más que apoyo. Estados Unidos no ofrece un horizonte esperanzador para la región, centrado en el desarrollo o la democracia, sino una relación de subordinación, riesgos e incertidumbre sin los medios necesarios para garantizarla. En ese contexto, China o la UE, si saben aprovechar esa ventana de oportunidad, pueden tener más espacio y ascendiente. Frente a la agresividad y unilateralidad de Estados Unidos, pueden presentarse como abogados de un orden multilateral más inclusivo y basado en reglas y ser socios más fiables en las esferas política y económica, y en la gobernanza global.

## Bibliografía

- Applebaum, A. (2025). Europe's Elon Musk Problem. *The Atlantic*.
- Beattie, A. (2025a). Trump is giving a green light to corporate corruption abroad. *Financial Times*.
- . (2025b). Trump fought the trade law, and Trump won. *Financial Times*.
- Bradford, A. (2020). *The Brussels Effect. How Europe rules the world*. Oxford, Oxford University Press.
- Camargo, L. (2024). *Trumpismo discursivo. Origen y expansión del discurso de la ola reaccionaria global*. Arganda del Rey, Verbum.
- Carquez, C. y Reyes, L. M. (2025). Paso a paso: ¿cómo fue la negociación entre Grenell y Maduro?. *Efecto Cocuyo*, 6 de febrero
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2024). *Panorama de las políticas de desarrollo productivo en América Latina y el Caribe 2024*. Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
- Chávez, S. y Palma, S. (2025). Donald Trump to halt enforcement of law banning bribery of foreign officials. *Financial Times*.

- Chávez, S. *et al.* (2025). Trump says US and Russia to start talks on Ukraine war 'inmediately'. *Financial Times*.
- Cooley, A. y Nexon, D. (2025). Trump's antiliberal order. *Foreign Affairs*, pp. 16-24.
- Daniels, J. *et al.* (2025). US pauses tariffs on Colombia after deal on deportations. *Financial Times*.
- Dans, P. y Groves, S. (2023). *Mandate for Leadership. The Conservative Promise*. Washington, The Heritage Foundation.
- Davidson, H. (2025). «Trump says China is 'operating' the Canal - Here are the facts. *The Guardian*.
- Ekman, A. y Everts, S. (2024). *Contestation. The New dynamic driving global politics*. París, European Union Institute for Security Studies (EUISS), Chaillot Papers.
- El Grand Continent*. (2025a). Trump y la doctrina Mar-a-Lago: coordenadas de una presidencia imperial. *El Grand Continent*.
- . (2025b). Trump pone en marcha el Proyecto 2025: los 26 primeros decretos del presidente de Estados Unidos. *El Grand Continent*.
- . (2025c). Cambio de régimen: el discurso completo de J.D. Vance en Múnich. *El Grand Continent*.
- Financial Times*. (2025a). Is corporate America going Maga?. *Financial Times*.
- . (2025b). What will be the impact of a North American trade war?. *Financial Times*.
- Forti, S. (2024). *Democracias en extinción. El espectro de las autocracias electorales*. Madrid, Akal.
- Foy, H., Miller, C. y Schwartz, F. (2025). Europe left reeling by over Ukraine peace talks with Russia. *Financial Times*.
- Griffin, R. (2007). *Modernism and Fascism*. Basingstoke, Palgrave Macmillan.
- Jiménez, M. (2025a). Trump barre la era Biden con una avalancha de decretos contra la inmigración, la agenda verde y la diversidad. *El País*.
- . (2025b). Donald Trump y los cachorros de Elon Musk dinamitan el sistema desde dentro. *El País*.
- . (2025c). Trump ordena poner en marcha aranceles a la Unión Europea como represalia por el IVA. *El País*.
- Jiménez, M. y Camhagi, E. (2025). Trump suspende un mes los aranceles a México tras hablar con su presidenta, Claudia Sheinbaum. *El País*.

- Klein, E. (2025). No le creas. *New York Times*.
- Laïdi, Z. (2025). Europa can and must resist Trump. *Project Syndicate*.
- Lakoff, G. (2004). *No pienses en un elefante. Lenguaje y debate político*. Madrid, Editorial Complutense.
- Lauria, S. (2025). Panamá no renovará el acuerdo de entendimiento con China tras reunirse con Marco Rubio. *El País*.
- Levitsky, S. y Way, L. A. (2025). The Path to American Authoritarianism. What Comes After Democratic Breakdown. *Foreign Affairs*.
- Liptak, D. (2025). Trump's Actions Have Created a Constitutional Crisis, Scholar Says. *The New York Times*.
- Macron, E. (2024). Construir el nuevo paradigma europeo (discurso completo de E. Macron en La Sorbona. *El Grand Continent*.
- Miller, J., Rogers, A. y Murphy, H. (2025). Can anyone stop Elon Musk's hostile takeover of the US government?. *Financial Times*.
- Milne, R., Rachman, G. y Politi, J. (2025). Donald Trump in fiery call with Denmark's prime minister over Greenland. *Financial Times*.
- Mitchell, I. y Hughes, S. (2025). *Which Countries are Most Exposed to US Aid Cuts; And What Other Providers Can Do*. Washington, Center for Global Development.
- Murray, C. (2025). El Salvador offer to house US prisoners in its jails. *Financial Times*.
- Murray, C. y Ho-him, C. (2025). Panama begin audit of H.K. company in nod to Trump. *Financial Times*.
- Orchard, P. y Wiener, A (2023). Norms and Norm Contestation. En: Mello, P. y Ostermann, F. (eds.). *Routledge Handbook of Foreign Policy Analysis Methods*. Londres, Routledge, pp. 51-66.
- Orellana, P. y Michelsen, N. (2019). Reactionary Internationalism: the philosophy of the New Right. *Review of International Studies*. 45(5), pp. 748-767.
- Palomares, G. y García, D. (2019). *Imperium. La Política Exterior de los Estados Unidos del Siglo XX al XXI*. Valencia, Tirant lo Blanch.
- Patrick, S. (2025). *Trump's distorted view of sovereignty and American Exceptionalism*. Carnegie Endowment.

- Pistor, K. (2025). The New Washington Consensus. *Project Syndicate*.
- Platt, E. et al. (2025). BlackRock to buy Panama Canal ports after pressure from Donald Trump. *Financial Times*.
- Politi, J. et al. (2025). US suspends military aid to Ukraine. *Financial Times*.
- Puglierin, J. y Shapiro, J. (2023). *The art of vassalisation: How Russia's war on Ukraine has transformed transatlantic relations*. European Council on Foreign Relations. Policy Briefs.
- Rachman, G. (2025a). Trump, Putin, Xi and the new age of Empire. *Financial Times*.
- Rachman, G. (2025b). Vance's real threat to Europe. *Financial Times*.
- Raziel, Z. y Ferri, P. (2025). México extradita a 29 narcotraficantes a Estados Unidos, entre ellos Caro Quintero y los líderes de Los Zetas. *El País*.
- Roth, K. (2025). Trump's sanctions against the ICC are disgraceful. *The Guardian*.
- Rizzi, A. (2025). Vance lanza un ataque ideológico contra Europa y desata la indignación en Múnich. *El País*.
- Roy, D. (2025). Who controls the Panama Canal?. Washington, Council on Foreign Relations.
- Rubio, M. (2025). An America First Foreign Policy. *Wall Street Journal*.
- Sanahuja, J. A. (2017). Posglobalización y ascenso de la extrema derecha: crisis de hegemonía y riesgos sistémicos. En: Mesa, M. (coord.). *Seguridad internacional y democracia: guerras, militarización y fronteras. Anuario 2016-17*. Madrid, CEIPAZ, pp. 35-71.
- . (2024). Entre la policrisis y el interregno: conceptos para un orden internacional en transición. En: Marrero, I. (dir.). *El sistema internacional y el viejo nuevo mundo*. Valencia, Tirant Lo Blanch, pp. 255-296.
- Sanahuja, J. A. y López Burian, C. (2020). La nueva extrema derecha neopatriota latinoamericana: el internacionalismo reaccionario y su desafío al orden liberal internacional. *Conjuntura Austral*. 11(55), pp. 22-34.
- . (2023) Las «nuevas derechas» y la ultraderecha neopatriota: conceptos, teoría y debates en el cruce entre ideología y globalización. En: Sanahuja, J. A. y Stefanoni, P. (eds.).

- Extremas derechas y democracia. Perspectivas iberoamericanas*. Madrid, Fundación Carolina, pp. 13-35.
- . (2024). Las variaciones en la geopolítica de la ultraderecha neopatriota y la contestación al orden internacional. *CEBRI-Revista*. 11, pp. 17-36.
- Seisdedos, I. (2025). La administración de Trump deporta a cientos de migrantes a El Salvador, pese a que un juez ordenó para la expulsión. *El País*.
- Stott, M. y Rogers, A. (2025). US demands Panama reduce China influence over canal or face action. *Financial Times*.
- Sun, L., Keating, D. y Nirappil, F. (2025). CDC removes gender, equity references in public health material. *The Washington Post*.
- The Economist*. (2025a). Trump's brutal tariffs far outstrip any he has imposed before. *The Economist*.
- . (2025b). How Mexico and Canada handled Trump's tariff threat. *The Economist*.
- . (2025c). Panama symbolizes the Sino-American struggle for influence. *The Economist*.
- . (2025d). Donald Trump's assault on Europe. *The Economist*.
- The Economist Intelligence Unit. (2024). *Democracy Index 2023. Age of Conflict*. Londres, *The Economist*.
- The White House. (2025). *America First Trade Policy*. Washington.
- Vidal, M. (2025). Trump humilla a Zelensky en una tensa reunión en la Casa Blanca. *El País*.
- Vidal, M. y Ferrer, I. (2025). Trump sancionará al personal del Tribunal Penal Internacional que investigue a ciudadanos de EEUU o sus aliados, incluido Israel. *El País*.
- Walt, S. (2024). The Trump-Vance Unilateralist Delusion. *Foreign Policy*.
- Wiener, A. (2014). *A Theory of Contestation*. Berlin, Springer.
- Williams, A. (2024). Trump threatens BRICS nations with 100% tariffs if they undermine dollar. *Financial Times*.
- Williams, A. et al. (2025). What is Donald Trump's 'Reciprocal' tariff plan?. *Financial Times*.
- Washington Office on Latin America. (2025). Trump's Executive Orders and Latin America: Key Things to Know. Washington Office on Latin America (WOLA). *Features*.

Zürn, M. (2014). The politization of world politics and its effects: Eight propositions. *European Political Science Review*. 6(1), pp. 47-71.